

Contienda y ambigüedad: Minería y posibilidades de desarrollo¹

Anthony Bebbington, Universidad de Manchester

Leonith Hinojosa, Universidad de Manchester

Denise Humphreys Bebbington, Universidad de Manchester

Maria Luisa Burneo, Centro Peruano de Estudios Sociales

Ximena Warnaars, Universidad de Manchester

Contienda y ambigüedad, son las dos palabras que describen la relación entre la minería a gran escala y el desarrollo. “Contienda” porque para la mayoría la minería frecuentemente ha producido efectos sociales, medio ambientales y económicos adversos pero, ganancias significativas para muy pocos. Ambigüedad porque entre las poblaciones locales, así como a nivel de los profesionales del desarrollo, existe el sentimiento persistente de que la minería podría contribuir mucho más. En la coexistencia de sentimientos tan divergentes sobre la minería y sus impactos humanos y ambientales se encuentran las semillas de muchos conflictos. Este artículo presenta un análisis de los argumentos contrapuestos sobre las implicaciones de la minería para el desarrollo y explica porque la existencia de tanto conflicto alrededor de la minería no debería llamar la atención. Sugiere también que, no obstante los argumentos conceptuales matizados del beneficio potencial de la minería, existen diversas razones por las cuales seguirá produciendo protesta.

Para los ojos del activista y profesional del mundo occidental puede ser obvio que la minería a gran escala es negativa para el desarrollo. Las minas se han asociado con lamentables condiciones laborales y, en el caso de Sudáfrica, hay economías regionales enteras que están organizadas en torno a instrumentos territoriales y políticos diseñados para mantener una fuerza laboral barata y bajo control. La minería

¹ Este artículo ha sido posible gracias a la beca profesoral del Consejo Británico de Investigación Económica y Social, otorgada a Anthony Bebbington (RES051-27-0191), la cual apoya el programa Territorio, Conflictos y Desarrollo en los Andes (<http://www.manchester.ac.uk/sed/research/andes>), un proyecto de colaboración entre la Universidad de Manchester y el Centro Peruano de Estudios Sociales (www.cepes.org.pe). También se reconoce el aporte financiero de ESRC-DfID (RES167-25-0170). Agradecemos los comentarios y sugerencias de los dos lectores anónimos, Gavin Bridge, Stuart Kirsch, Bridget O’Laughlin y Tom Perreault. Agradecemos a la revista Development and Change por el permiso de publicar esta versión en español.

también se ha asociado con patrones evidentemente insostenibles de crecimiento y desarrollo. Los ejemplos son muchos: Potosí en Bolivia, en algún tiempo de la talla de Londres y fuente de significativa actividad extractiva, ahora la capital pobre de un departamento en situación de pobreza crónica e, irónicamente, atravesando en estos últimos años un nuevo boom minero; Appalachia, geológicamente rico pero también una de las regiones más pobres de Estados Unidos; Stoke-on-Trent (la ciudad natal del primer autor de este artículo), hace algún tiempo con actividades mineras y cerámicas y una industria del hierro y acero, pero cuyo declino presenciaba durante sus años juveniles; La Oroya, un complejo metalúrgico peruano al centro de una economía minera regional, declarada por el Instituto Blacksmith como una de las 10 ciudades más contaminadas del mundo (Blacksmith Institute, 2007; BBC, 2006). La contaminación del aire en La Oroya es tal que se llevan algunos niños fuera de la ciudad durante el día para que no tengan que respirar en ese ambiente (O'Shaughnessy, 2007).

La minería también ha sido asociada con una distribución espectacularmente desigual de la riqueza que produce. Mientras los niños y adultos de La Oroya mueren prematuramente, en el exclusivo Hamptons neoyorquino el dueño de la fundición ha construido lo que para algunos sería la mansión más cara del mundo si la pusiera para la venta (Shnayerson, 2003). En la reciente historia boliviana, los Barones del Estaño acumularon fortunas que se fueron yendo hacia grandes ciudades del país y del extranjero y, en la historia de Sud África, la economía basada en la fuerza laboral de reserva subvencionó la acumulación controlada y permitida por el régimen del *apartheid*. Al mismo tiempo la minería ha sido inspiración para las tristes y, a veces, trágicas canciones melódicas de Hugh Masakela (“Stimela – Tren de carbón”) en el Sudeste africano, como lo ha sido para los huaynos solemnes de los Andes peruanos.

Pero la realidad es aun más complicada que la que sugieren los ejemplos emblemáticos y en varios de los casos citados hay las semillas de complicaciones mayores. A pesar de lo poco que la minería dejó para las economías regionales británicas, los trabajadores mineros lucharon hasta el final para defender su industria y la cultura regional que ella había originado y mantenido. En Bolivia, durante todo el Siglo XX, los sindicatos mineros estuvieron liderando los cambios políticos progresistas. Inclusive en La Oroya, donde los casos de contaminación sanguínea en

niños y la ocurrencia de cáncer en adolescentes estremecen a quien lo observe, buena parte de la población defiende la permanencia de la fundición y de la economía minera regional con la cual ha estado simbólicamente identificada durante mucho tiempo. Tal defensa de una industria que deja cicatrices tanto en el paisaje como en los pulmones es recurrente en tiempo y en espacio. En el extremo, se puede decir que los pactos entre la población y la minería son Faustianos. Pero igual, al final son pactos y, aunque de forma desigual, hacen fluir beneficios hacia ambas direcciones. En palabras de June Nash (1979), en su clásico estudio de la cultura y economía política minera en Bolivia: “Nosotros comemos las minas y las minas nos comen”.

Esa ambivalencia hacia la minería que se encuentra tan presente en la cultura popular también se aprecia en la producción académica y las publicaciones sobre las políticas públicas, donde las opiniones en pro o en contra de la minería han sido recurrentes. Aun cuando autores como Rosser (2008) señalan que “en años previos a los 1980s la riqueza de recursos naturales fue abiertamente vista como una bendición para los países en vías al desarrollo”, tal opinión no se ha dado al unísono. Por ejemplo, la CEPAL (entre otros) sostuvo que la dependencia de la exportación de productos primarios termina deteriorando los términos de intercambio de las economías exportadoras. Más recientemente, los defensores de la “tesis de la maldición de los recursos naturales” expresan una preocupación similar respecto a los efectos de la dependencia minera en el crecimiento y la equidad de los países ricos en recursos mineros (Auty, 1993; Sachs and Warner, 1995; Ross, 2008). Aun aquellos autores que ven oportunidades para escapar de la maldición de los recursos naturales sugieren que ello solo será posible si las condiciones institucionales son las adecuadas; si no, sería preferible que los minerales sigan enterrados (Stiglitz, 2007).

Mientras tanto, organismos como el Grupo del Banco Mundial y otras instituciones financieras internacionales (IFIs) han continuado alentando a que los países ricos en recursos basen sus estrategias de desarrollo en el crecimiento de las industrias extractivas (Campbell, 2008). Consecuentemente, a partir de los 1990s, cerca de 90 países revisaron sus códigos mineros y de inversión (Bridge, 2004a), generando una respuesta inmediata de la industria la cual se ha expandido tanto en países con tradición minera como en los sin. Dicha expansión ha venido acompañada de conflicto social y debate político en torno a temas de minería, derechos humanos,

integridad medio ambiental y desarrollo, envolviendo tanto a activistas, como organizaciones técnicas y al sector minero privado. También ha sido motivo de campañas presidenciales (por ejemplo en Perú en el 2006), reformas constitucionales (Ecuador en el 2008) y esfuerzos de formular un modelo de desarrollo post-neoliberal (por ejemplo en Bolivia).

La expansión minera abre cuestiones de mucha importancia teórica sobre neoliberalización, democracia, y el Estado, y de la relación entre movimientos sociales y economía política. En este artículo empezamos discutiendo la forma cómo estos temas han venido siendo abordados en las discusiones académicas y analíticas sobre la “tesis de la maldición de recursos naturales” y las dinámicas socio-políticas de las economías mineras. Luego pasamos a discutir el rol de cada uno de los actores envueltos en estas relaciones, con especial atención primero en las IFIs y la industria minera, y segundo en los movimientos sociales y organizaciones y redes de activistas. Precisamente, los conflictos entre estos diversos actores reflejan el carácter contencioso y ambiguo de la relación entre minería, desarrollo y democracia. Sin embargo, estos mismos conflictos también podrían constituir el camino político hacia la construcción de instituciones que puedan promover formas de expansión minera que sean más incluyentes en términos económicos, y menos dañinas del medio ambiente.

MALDICIONES, CONFLICTOS, CONTAMINACIONES: DEBATES SOBRE LA “PARADOJA DE LA BONANZA”²

Buena parte de la producción sobre minería en las Ciencias Sociales ha estado dominada por debates sobre la tesis de la “maldición de recursos naturales”, la cual cobró mayor fuerza a inicios de los 1990s en un intento de explicar el pobre desempeño económico de países ricos en recursos mineros (Auty, 1993; 2001; Sachs y Warner, 1995). La tesis sugiere que la abundancia de recursos naturales genera una serie de distorsiones económicas y políticas, las cuales terminan por minar la contribución de las industrias extractivas al desarrollo. En una literatura paralela, también se ha señalado la existencia de un conjunto de “maldiciones” ambientales y

² Título de la obra clásica de Terry Karl sobre la maldición de recursos naturales (Karl 1997).

comunales que también pueden aparecer durante el proceso de expansión minera.³ Pero esta literatura no ha quedado sin respuesta. Algunos autores han cuestionado la existencia de “una maldición de recursos naturales” (Davis, 1995); otros han cuestionado los métodos de análisis e indicadores que se han usado para demostrar la tesis (Brunnschweiler y Bulte, 2008); y otros han sugerido que, si es que la minería ha venido asociada con un pobre desempeño económico y político, ello se debe a las instituciones políticas que en su momento regían antes que a la minería en si misma (David y Tilton, 2002; Humphreys y otros, 2007). En esta sección pasamos a revisar las diversas formas en las cuales la literatura ha analizado la relación entre minería y desarrollo y sugerimos que, si bien hay puntos convergentes dentro del debate, esa convergencia termina siendo más intelectual que práctica.

Minería, crecimiento y pobreza

La asociación entre minería y una pobre tasa de crecimiento económico es central en la tesis sobre la “maldición de los recursos naturales” (Auty, 1993; Sachs y Warner, 1995; Weber-Fahr, 2002; Freudenburg y Wilson, 2002). Las razones que sostienen tal asociación son: la ocurrencia de la “enfermedad holandesa” (Dutch disease), la cual produce que los niveles de consumo y de inversión durante los periodos de boom minero no se puedan sostener en periodos de decaimiento y, al producir distorsiones en el tipo de cambio y de los salarios, reduce las oportunidades de sectores no mineros como la agricultura y la industria y con ello genera economías de enclave basadas en los sectores extractivos. Estos efectos han sido generalmente observados en economías con dependencia en recursos mineros (Mikesell, 1997); sin embargo, se puede también decir que la presencia de recursos mineros no necesariamente es el único factor que limita la diversificación de la estructura económica. Así, la introducción de nuevos marcos institucionales que favorecen la concentración de la

³ Mucha de esta literatura ha sido producida por organizaciones de activistas y existe a manera de “literatura gris”, documentos electrónicos y páginas web. De hecho, con excepción de debates sobre minería y temas macroeconómicos o políticos, la comunidad de activistas ha sobrepasado lo producido en esferas más académicas. Entre los sitios web más conocidos están: Earthworks, <http://www.earthworksaction.org/>; Mines and Communities, <http://www.minesandcommunities.org/>; No Dirty Gold, <http://www.nodirtygold.org/>; Observatory for Mining Conflicts in Latin America, <http://www.conflictosmineros.net/al/html/index.php>; and Oxfam America, http://www.oxfamamerica.org/whatwedo/issues_we_work_on/oil_gas_mining/.

inversión en la minería ha sido producto de un conjunto mayor de cambios políticos neoliberales, tanto en contextos tan diversos como Asia Central (Clark y Naito, 1998) o en los Andes (Bebbington, 2007).

La concentración de la actividad en un sector de la economía trae consigo vulnerabilidad asociada a la dependencia en exportaciones debido a la volatilidad de precios internacionales y al hecho de que las fases superiores de procesamiento de los minerales están controladas por selectos actores económicos que operan fuera de las economías domésticas. Además, el hecho de que los complejos mineros se desarrollan generalmente bajo esquemas de economías de enclave hace que los encadenamientos que genera con productores locales es muy reducida (al punto de que en algunos casos las empresas mineras importan alimentos de regiones capitales o del extranjero vía contratos con empresas alimentarias transnacionales: Szablowski 2002:263). Consecuentemente, el efecto multiplicador en las economías locales y regionales es reducido.

Estrechamente ligado a tales observaciones sobre la relación entre la minería y el crecimiento económico de un país, está el argumento que “la minería guarda muy poca relación con la reducción de la pobreza” (Pegg, 2006:376). Freudenburg y Wilson (2002), basados en una revisión “meta” de 301 estudios, llegan a una conclusión parecida con respecto a la relación entre minería y el desarrollo económico en los Estados Unidos. Estos reducidos efectos sobre pobreza se explican de diversas maneras. Una primera interpretación parte de la observación que la minería es mala para el crecimiento económico, lo cual explicado por Michael Ross en un influyente documento de Oxfam America sugiere que: “si el crecimiento es bueno para los pobres, y la exportación de petróleo y minerales son malos para el crecimiento, entonces la industria extractiva es mala para los pobres” (Ross, 2001:9). Una segunda línea de explicación surge de una visión más amplia de política económica de la expansión minera y sugiere que la disponibilidad de riqueza minera desalienta la inversión en el incremento de la productividad en sectores no mineros, lo cual, a su vez, lleva a insuficientes niveles de inversión en educación (Pegg, 2006) (aunque otros autores, usando otro tipo de indicadores, llegan a la conclusión opuesta - que la minería y mayor inversión en educación están positivamente asociadas: ej. Stijns, 2006). Una tercera posición (que se encuentra dentro del mismo sector minero) insiste

en que la minera es positiva para el crecimiento económico, pero reconoce que su impacto en reducción de la pobreza ha sido decepcionante debido a las limitadas capacidades de los gobiernos y a aspectos más generales ligados a gobernabilidad (ICMM, 2006).

Dependencia en minerales, gobernabilidad y conflicto

Junto a los efectos en la estructura económica de los países ricos en recursos mineros, se ha argumentado también que la concentración de la actividad económica en un sector produce relaciones socio-políticas e institucionales que socavan las bases de un desarrollo incluyente y sostenible. La concentración sectorial origina una concentración de la propiedad y del poder, generalmente en manos extranjeras. Esto reduce las oportunidades de competencia política en la formulación de políticas y de diseño institucional, y potencialmente induce que las instancias de poder sean capturadas y usadas para propósitos sesgados. La concentración también conduce a flujos de ingreso, que son grandes y fácilmente identificables, generando conflictos para su control. Las rentas mineras pueden también alimentar una sobre-expansión de la burocracia e inducir formas de patrocino, clientelismo y chanchullos, las cuales deterioran la calidad de gobierno (Auty, 2008; Auty y Gelf, 2001).

La principal relación negativa entre gobernanza y riqueza mineral se refiere a la falta de transparencia y a la corrupción que puede acompañar el control y el uso del ingreso minero. Los casos de corrupción que envuelven el uso de dichos recursos y el favoritismo que origina hacia determinados sectores poblacionales o lugares que, a su vez, favorecen el fortalecimiento de los grupos en poder, han sido largamente documentados. Asimismo, el ingreso fiscal proveniente de industrias extractivas puede socavar el establecimiento de un “contrato fiscal-social” entre gobernantes y contribuyentes lo cual da a los ciudadanos la autoridad para exigir que el gobierno rinda cuentas sobre el uso de los impuestos que han pagado (Karl, 2007). Sin una base de esas características, las posibilidades de corrupción incontrolada y de un deficiente uso de recursos públicos son mayores.

El punto más importante en este sentido es que, si “la base de la autoridad estatal es históricamente construida a través de una serie de intercambios de recursos por

instituciones” (Karl, 2007:259), entonces en Estados dependientes en recursos minerales tales negociaciones se dan no entre el Estado y ciudadanos sino entre el Estado y las corporaciones, los países dominantes y las organizaciones financieras cuyas actividades producen los recursos fiscales. Tales negociaciones dan lugar a arreglos institucionales diseñados para atender las necesidades y demandas de dichos actores antes que las demandas de los ciudadanos legitimando al estado frente a intereses internacionales y no tanto frente a los nacionales y ciudadanos.

Esta es una de las razones por la cual la riqueza mineral ha sido identificada como causa de conflicto civil armado (Collier y Hoeffler, 2005; Ross, 2008; para opiniones contrarias ver De Soysa y Neumayer 2007). En la década pasada, mucha de la literatura sobre conflictos en economías dependientes de recursos mineros o hidrocarburos ha discutido si estos conflictos deben entenderse en términos de las “quejas” políticas e ideológicas que se producen entre quienes enfrentan los costos de la extracción de minerales y ven extraer los recursos de sus territorios, o si mas bien deberían entenderse como una consecuencia de la “avaricia” de aquellos actores quienes responden a las oportunidades de saqueo o extorsión a las compañías mineras para financiar la violencia a gran escala (Collier y Hoeffler, 2004, 2005). En su estudio de Las Filipinas, Holden y Jacobson (2007) muestran que ambos efectos pueden darse al mismo tiempo: según su análisis, los recursos mineros producen conflictos que nacen tanto de las quejas locales como de las formas de extorsión que inducen. Además sugieren que la minería acentúa el conflicto - debido a la militarización que acompaña la expansión minera – al mismo tiempo que retrasa su solución (debido a que el gobierno filipino no esta dispuesto a ceder zonas con recursos minerales a instancias de gobierno de origen musulmán).

Por supuesto, no todos los conflictos alrededor de las industrias extractivas conducen a guerra civil armada. Muchos conflictos son mas bien la expresión de luchas socio-ambientales sobre el control del espacio, la gobernanza territorial, el acceso a tierra y agua, la defensa de derechos humanos y ciudadanos, y la insatisfacción respecto a la distribución de rentas mineras (véase Peluso y Watts, 2001; Bebbington, 2007). Antes que ver tales conflictos como algo necesariamente problemático y un indicador de que el desarrollo esta yendo mal, se puede entender también que tales conflictos son potencialmente creativos. Así, ciertas analogías extraídas de experiencias históricas

muestran que los conflictos han servido para producir instituciones públicas más incluyentes que - si no fuera por el conflicto – no hubieran sido creadas.

La expansión de la minería a gran escala puede también producir conflictos *entre* los diferentes tipos de minería y de mineros. En determinado momento la minería de pequeña escala o artesanal y la de gran escala pueden coincidir en el mismo territorio y en varios de estos casos no son pocas las veces en que el gobierno central ha cedido el uso de recursos a las grandes empresas. Hilson y Yakovelva (2007) han documentado tal tipo de conflictos en Ghana, nosotros hemos encontrado evidencias de lo propio en los países andinos, y han sido notados también en Papua Nueva Guinea, Indonesia, Surinam y Guyana.⁴

Minería y medio ambiente

Si frente a argumentos como estos le ha sido difícil al sector minero argumentar que *puede* ser un elemento positivo para el crecimiento y la gobernanza, argumentar su impacto sobre el medio ambiente le ha sido todavía más complicado. Así, las organizaciones de incidencia han juntado datos demostrando que, a escala global, el impacto de la minería ha sido dañino; otros han señalado que “el descubrimiento, extracción y procesamiento de recursos mineros se han visto por muchos observadores como una de las actividades del sector privado que mayor daño produce a nivel social y medio ambiental” (Jenkins y Yakovleva, 2006:207). Según Cardiff y Sampat (2007), mientras la minería a nivel global contribuye cerca del 1% de la producción, consume entre 7 y 10% de la energía y es responsable de aproximadamente 13% de emisiones de dióxido de sulfuro. También, cerca de 39% de los bordes arbóreos en peligro de deterioro estarían amenazados por la minería. En un caso extremo, todo un valle entre Chile y Argentina donde se ubica un glaciar es zona de un significado conflicto minero.⁵

En una escala más local, los yacimientos minerales a menudo se encuentran en las cabeceras de cuenca – que son las fuentes de agua de las cuales se alimentan

⁴ Sobre minería artesanal véase, por ejemplo, Hilson y Yakovelva (2007) y Fisher (2007).

⁵ Se trata de la mina Pascua Lama que la compañía canadiense Barrick Gold Corporation esta tratando de desarrollar.

poblaciones rurales y urbanas - o en zonas de desierto donde el agua, requerida para la extracción y procesamiento minero, tiene que ser desviado de áreas conexas y de otros usos. Por otro lado, con el uso de tecnologías a tajo abierto las transformaciones de paisajes locales y regionales asociadas con la minería se vuelvan más significativas. Por ejemplo, en el caso de Cajamarca en Perú, el área de la mina de oro a tajo abierto de Minera Yanacocha⁶ excede la de la ciudad capital y es claramente visible desde el espacio (Bury, 2005). En general, las minas con tecnología moderna requieren inmensas cantidades de energía y, por ello, su desarrollo ha implicado la construcción de represas y plantas hidroeléctricas, o la extensión de redes de gas natural, lo cual, a su vez, ha significado aun mas competencia sobre agua y tierra entre la minería y otras actividades.

Estos y otros impactos medio ambientales han dado lugar al desarrollar de sistemas de contabilidad ambiental que pretenden dar cuenta de los beneficios finales que la minería produce. En Chile – uno de los países que se presenta como abanderado del argumento “la minería conduce al desarrollo” - los sistemas convencionales de cuentas nacionales indican que, durante la primera mitad de los 1990s, entre 7 y 9% del PBI habría sido producido por la minería. Sin embargo, economistas medio ambientales de la Universidad de Chile y de la Comisión Nacional para el Medio Ambiente concluyeron que “los métodos tradicionales de calculo sobreestimaron el aporte del sector minero... en aproximadamente 20% a 40%” (Figuerola y otros, 2007:215). Si se hubieron tomado en cuenta los efectos adicionales en salud y medio ambiente, la sobre estimación sería aun mucho mayor.

Convergencias y divergencias

Dentro del mundo académico y del activismo, el debate sobre minería y desarrollo ha generado una serie de términos simbólicos y llamativos como “la maldición de recursos naturales”, “la enfermedad holandesa”, “avaricia e injusticia”. Es quizá por la potencial resonancia política de estos términos, que han sido cuestionados con tanta energía. Así, mientras algunos sugieren que “la maldición de recursos naturales ha

⁶ Minera Yanacocha es de propiedad de Newmont, Buenaventura y la Corporación Financiera Internacional. A diferencia de la minería convencional de socavón, la mina de tajo abierta implica el desplazamiento de grandes cantidades de tierra de la superficie – Yanacocha removió cerca de 200 millones de toneladas de roca por año (2003-2005).

sido bien documentada” (Collier y Hoeffler, 2005:625), otros argumentan que la evidencia obtenida sobre la maldición en realidad depende del tipo de indicadores que se escoja para demostrarla (Brunnschweiler y Bulte, 2008). Por su parte, la industria minera ha buscado replantear el debate sobre “la maldición de recursos naturales” en términos de la “dotación de recursos” (ICMM, 2006).

En la medida en que estos debates se han ido dando, pareciera también que las opiniones han ido convergiendo. Por ejemplo, Auty ve más posibilidades de escapar a la maldición (1993, 2001, 2008) y Pegg (2006: 377) “acepta el *hecho* de que potencialmente la minería es una gran fuente de riqueza que puede generar enormes beneficios para los países pobres” (énfasis nuestro). Mientras tanto, organizaciones que han promovido la minería, como el Banco Mundial, sugieren que “los países con importantes ingresos mineros han tenido un desempeño menor que aquellos con menor ingreso minero” (Fahr-Weber, 2002: 7).⁷ Autores que criticaron la tesis de la maldición de recursos, ahora concluyen que tal vez la minería no debería promoverse en todo lugar en la misma medida (Davis y Tilton, 2002).

La convergencia (si así se puede llamar) entre estas posiciones se da alrededor de temas de contexto y de instituciones; muchas de ellas con un tono de “todo depende de”.⁸ Particularmente, allá donde se analiza si la expansión minera se alinea a la tesis de la maldición de recursos o si, más bien, produce crecimiento, se enfatiza el papel que juega la calidad las instituciones: si es que existe un contrato fiscal-social o no, en el nivel de transparencia, o en la calidad de gobierno. Escribiendo desde el Banco Mundial, Farh-Weber (2002:14) concluye que aquellos países que “lograron hacer las cosas bien” son quienes son competentes en manejo económico y sectorial y que, el reto de construir capacidad institucional es “más urgente” “en aquellas economías que dependen de la minería”.

Consistente con dicho énfasis en instituciones, Karl (2007: 256) insiste en que “la maldición de recursos es principalmente un fenómeno político antes que un fenómeno

⁷ Sin embargo, el reporte también señala que, comparativamente dentro de una misma región, los países que tienen recursos mineros han tenido mayor desempeño que los que no lo tienen.

⁸ De forma similar, Aspinall (2007) muestra que la probabilidad de que la disputa por recursos mineros se traduzca a la movilización armada depende de las historias regionales y de los procesos de formación del Estado.

económico”.⁹ Sin embargo, al presentar el problema desde un punto de vista *político* y no tanto desde uno de *gobernanza*, Karl permite explicitar que las divergencias se dan precisamente en torno a lo *político*, en dos sentidos: el proceso político que subyace la construcción del estado; y la *realpolitik* de las inversiones mineras. En lo primero nos referimos a como entender los procesos a través de las cuales las llamadas instituciones “competentes” puedan surgir. Mientras las IFIs y otras organizaciones abordan las cuestiones institucionales desde un punto de vista de construcción de capacidades, la experiencia histórica sugiere que la consolidación de instituciones democráticas no viene como producto de diseños tecnocráticos, de la filantropía empresarial o de los préstamos de las IFIs para mejorar la calidad de la administración pública, sino que es resultado del conflicto (Bebbington y Burneo, 2008; Boix 2008). La misma Terry Karl señala que las distorsiones institucionales y políticas que surgieron en economías dependientes “no se pueden arreglar sin un enorme esfuerzo coordinado de todos los actores concernidos” (Karl, 2007: 258). Entonces, el desacuerdo persiste en torno a los mecanismos que facilitarían el cambio institucional (se dará a consecuencia de procesos socio-políticos o préstamos provenientes de las IFIs?) y a los periodos de tiempo necesarios para que ello ocurra (se dará en el tiempo histórico o en el tiempo determinado por los proyectos?).¹⁰

La creencia de las IFIs, las empresas y los gobiernos respecto a la posibilidad de creer que la buena gobernanza puede ser lograda en el periodo de tiempo que tienen los proyectos se relaciona, a su vez, a la *realpolitik* del sector. Esta *realpolitik* es impulsada por una presión intensa para continuar, y sobre todo expandir, las inversiones en la industria extractiva minera. Así, mientras la banca multilateral, las empresas y otros actores reconocen que “la gobernanza es importante”, la acción se sobrepone a las publicaciones – y estas acciones revelan una historia distinta. Nuestro análisis de tales acciones de la industria es comentada mas tarde; aquí nos concentramos en las acciones de las IFIs y, por tanto, en los gobiernos que conforman las instancias directivas de dichas organizaciones.

⁹ Si bien la evidencia presentada por Karl se refiere a “petro-estados”, su trabajo sobre transparencia de ingresos también toca países mineros.

¹⁰ En una entrevista con Anthony Bebbington, un ejecutivo del Banco Interamericano de Desarrollo pregunto incrédulamente: entonces se tendrían que dejar [los recursos mineros] en el suelo hasta que las instituciones se construyan? Tal vez la respuesta es si (Stiglitz 2007).

La práctica de las IFIs sugiere que las inversiones se están dando de forma continua y aceleradamente. En el Banco Interamericano de Desarrollo, el grupo de desarrollo del sector privado viene creciendo. El Grupo del Banco Mundial ha continuado su apoyo a programas orientados a reformar las normas de inversión y los códigos mineros, las facilidades para la repatriación de beneficios, la reducción y fijación de impuestos y regalías; también ha apoyado la prospección geológica minera a fin de generar la información necesaria para que las compañías puedan más fácilmente decidir sobre donde realizar inversiones en exploración (Bury, 2005; Campbell, 2003:4; Hilson y Yakovleva, 2007). Al mismo tiempo el MIGA esta involucrado en inversiones mineras de gran escala (Szablowski, 2002) y la Corporación Financiera Internacional tiene inversiones en varias minas grandes, una de estas es Minera Yanacocha en Perú, la cual se dice es una de las inversiones mas rentables de su portafolio.

Controversialmente, algunas de estas inversiones se han dado en situaciones en las que el mismo análisis de gobernanza del Banco Mundial hubiera debido indicar que no eran recomendables, lo cual, para autores como Pegg (2006:382) significa que “el Banco [Mundial] se niega a introducir criterios de buena gobernanza como una precondition para involucrarse en el sector minero”. La respuesta relativamente cauta de la Gerencia del Banco Mundial frente a los hallazgos del Reporte de Industrias Extractivas parece confirmar esta opinión y, en todo caso, muestra la poca inclinación del Banco para disminuir sus inversiones en los sectores extractivos mineros o para establecer pre-condiciones ex ante más exigentes (Pegg, 2006). Entrevistas con funcionarios de las IFIs indican que la opinión predominante dentro de sus respectivas instituciones es que, aun cuando las condiciones de gobernanza en un país no son las mejores, es conveniente que el banco estuviese involucrado ya que, desde adentro, podrían hacer que las cosas mejoren.

Campbell (2003, 2006, 2008) desarrolla la critica aun mas y argumenta que la forma en la cual el Grupo del Banco Mundial ha apoyado a la minería ha terminado *minando* la capacidad del estado y *debilitando* cualquier sinergia potencial entre minería y desarrollo. Señala también que las reformas han sido diseñadas para facilitar las inversiones y que se ha dado muy poca atención a temas como desarrollo regional, articulaciones agricultura-industria, protección medio-ambiental o impactos sociales:

“... las reformas han tenido el efecto de reducir la capacidad institucional, restringir las opciones de política, así como de traer abajo las normas y estándares en áreas críticas para el desarrollo social y económico y de protección ambiental (Campbell, 2008:3).

En breve, las reformas en el sector minero han debilitado la capacidad de los gobiernos Africanos para precisamente mejorar sus roles de gestión, monitoreo y vigilancia que por otro lado eran reconocidos como esenciales por el Banco Mundial (Fahr-Weber, 2002).

Si, mas allá de cualquier argumento matizado en cuanto a la importancia de factores contextuales, es la *realpolitik* de la extracción mineral lo que realmente determina la relación minería-desarrollo, entonces parece más que probable que los efectos negativos identificados en la literatura sobre la ‘maldición de recursos’ se mantendrán en el tiempo. Si uno ve la tendencia de ciertas prácticas del sector, esto parece ser aun mas claro.

PRACTICA DEL SECTOR MINERO Y LA GEOGRAFIA CAMBIANTE DE LA MINERÍA

En el transcurso de las ultimas dos décadas el sector minero internacional ha experimentado cambios en las geografías globales de inversiones, propiedad y demanda, así como en las geografías nacionales y locales de extracción. No todos estos cambios implican que los patrones identificados en la tesis de la maldición de recursos vayan a persistir, pero sí traen implicancias ambiguas para la calidad de la gobernanza de los países que experimentan crecimiento minero. También parece probable que generarán protesta social.

Entre 1990 y 2001, la inversión minera en países en vías de desarrollo creció, en términos relativos, de una manera sostenida mientras, en cambio, se redujo en países desarrollados (Bridge, 2004a). Este parece ser un efecto de las reformas institucionales que señalamos anteriormente, junto a un efecto de empuje derivado del fortalecimiento de ciertas normas y estándares de protección ambiental en países del Norte (Holden y Jacobson, 2007; Cardiff y Sampat, 2007). No obstante ello, la

actividad minera en el Norte continua (especialmente Canadá, Estados Unidos de America y Australia); además parece que se ira expandiendo hacia el Ártico Canadiense, la Antártica y territorios conexos debido a los efectos de calentamiento global, deshielo y cambios en las políticas. Sin embargo, la creciente inversión en los países en desarrollo ha sido palpable.

Dicho crecimiento dentro del Sur global ha sido diferenciado con algunas regiones – y países dentro de regiones – observando una mayor expansión que otras (Bridge, 2004^a; Cardiff y Sampat, 2007). Latinoamérica pasa de 12% de inversiones globales en 1990 a 33% en el 2000 (de Echave, 2007); en ese mismo periodo, concentró 12 de los 25 mas grandes proyectos de inversión a nivel mundial (Bridge, 2004a). Las inversiones en exploración minera en África también se incrementaron rápidamente pasando de 4% del gasto global en 1991 a 17.5% en 1998. En África sub-Sahara la inversión minera se duplicó entre 1990 y 1997 (Pegg, 2006:383). La producción minera de oro en Ghana se incrementó en 700% en las dos últimas dos décadas (Hilson y Yakovleva, 2007:101).

También se notan cambios en la distribución geográfica de la procedencia de las compañías mineras. Hacia el 2006, “después de haber sido una compañía regional de hierro, [la minera brasileña Companhia Vale do Rio Doce] surgió como un gigante global que opera a plena capacidad, de forma diversificada e integrada”, convirtiéndose en una de las cuatro empresas mundiales top (PricewaterhouseCoopers, 2007:29). En 1998, de las 40 empresas mas destacadas cinco eran chinas y dos se provenían de Rusia, India e Indonesia respectivamente (PricewaterhouseCoopers, 2008:50). Así, uno empieza a ver que empresas mineras con domicilio en las economías van incrementando su participación en Latinoamérica, África y otras regiones del mundo en vías de desarrollo (generalmente en modalidades de inversión que combinan inversión de la empresa con cooperación al desarrollo proveniente de sus estados).¹¹ La presencia de estas nuevas empresas también se siente en mercados de inversión; por ejemplo, en el 2007 por primera vez una empresa Británica (Monterrico Metals, con significativos activos de cobre en Perú) en

¹¹ “Por ejemplo, en Enero del 2008 empresas chinas firmaron un contrato que incluía prestamos de alrededor de \$5bill al gobierno de DRC para proyectos de infraestructura, en un contrato inusual por dos minas de cobre y cobalto. Adicionalmente, los prestamos del Banco de Desarrollo Chino ayudo a a Chinalco a comprar 9% de las acciones del grupo Rio Tinto” (PricewaterhouseCoopers 2008:42).

la lista del Mercado Alternativo de Inversiones Londinense vio la mayoría de sus acciones pasar a propiedad de un consorcio chino (Zijin).¹²

La geografía de la demanda de minerales también ha cambiado, colocando a Asia (sur y este) como región consumidora de metales cada vez más importante. Junto a inversiones en fondos de protección para mercancías y derivados (PricewaterhouseCoopers, 2007:49-50) esto ha presionado el continuo incremento de precios desde el 2003. Mientras tanto, el avance tecnológico y la innovación en técnicas de exploración, producción y manejo medio ambiental han permitido que la frontera minera se expanda y han hecho rentables depósitos que antes no lo eran. El resultado final ha sido un incremento importante de las utilidades: el ingreso de los 40 compañías mineras más grandes en el mundo creció 2.6 veces entre el 2002 y 2006, mientras que las utilidades netas crecieron en más de 15 veces hacia el 2007 y 20 veces hacia el 2008 (PricewaterhouseCoopers, 2007:34, 2008:27).

Estos cambios parecen haber cambiado los cálculos de riesgo de inversión en el sector de forma tal que ahora las empresas están entrando a zonas, con reservas minerales importantes, donde antes se consideraba demasiado riesgoso invertir. El cambio en las tecnologías de control territorial y social parece ofrecer posibilidades para manejar tal riesgo. La consolidación de la industria de seguridad privada global permite a las empresas mineras vigilar y asegurar los espacios donde se van a operar. Así, dado que “las nuevas formas de capital se cruzan con nuevas técnicas para establecer un orden político selectivo” (Ferguson, 2006:195), en África, “los países que (en términos de los *reformers* del Banco Mundial y del FMI) han sido los mayores “fracasos” son también los que han alcanzado *mayor* inversión privada” (ibid:196) mucha de la cual ha sido en el sector extractivo (aunque sobre todo en hidrocarburos).¹³ Ferguson también señala que los contextos riesgosos pueden perversamente atraer mayor inversión minera debido a que – en la medida en que los espacios de operación minera pueden ser acordonados y separados de los espacios nacionales mayores, así reduciendo el nivel de riesgo para la mina – tales contextos políticos ofrecen mayores oportunidades para la manipulación de impuestos, la repatriación de ingresos y otras

¹² Estos cambios traen complicaciones para la labor de activistas, quienes tradicionalmente habían direccionado su acción hacia empresas de origen norteamericano, europeo o australiano.

¹³ A pesar del peso de los hidrocarburos, Ferguson también menciona “los problemas de tipo-petrolero que se dan en el sector minero”

prácticas extra-legales de optimización de ganancias (a este respecto véase también Frynas 1998).

Tal es la situación en partes de África que Ferguson (un experto en la región) habla de “enclaves de alta riqueza mineral, eficientemente explotados por empresas privadas flexibles, con el servicio de seguridad provisto por corporaciones especializadas sobre la base de “cuando se requiere” y con el respaldo de élites locales, quienes nominalmente aparecen como poseionarios soberanos y quienes certifican la legalidad y la legitimidad internacional de la industria a cambio de beneficios personales” (ibid:204). Ahora bien, el imagen que nos presenta Ferguson puede ser un caso extremo de los tipos de relación entre inversiones, gobernanza y geografía que han surgido en este reciente proceso de expansión minera – sin embargo, tampoco parece tan distinto de lo que pasa en otras regiones; en todo caso, las diferencias serian más de grado que de naturaleza. En los Andes la minería se ha movido hacia áreas que no tenían tradición minera y que eran tradicionalmente ocupadas por comunidades agro-pastoriles. Dicha expansión ha generado protesta de las comunidades y de activistas. La respuesta del sector a esas protestas ha hecho evidente la conexión existente entre empresas, seguridad privada y fuerzas de seguridad del estado. Aun en estos medios más democráticos los activistas han sido sujeto de vigilancia y acusaciones de terrorismo¹⁴ y las conexiones entre minería y seguridad privada se presentan en todas las facetas del sector. Aquí el punto mas general es que la expansión minera ha venido acompañada por cambios en la forma como la seguridad es provista, situación en que el estado delega esa función (o la subcontrata) al sector privado (Campbell, 2006). De esta forma, la expansión del sector se vuelve en un vector importante (aunque no el único vector) de cambios profundos en la relación entre estado, ejercicio de la fuerza y espacio.

La seguridad privada y los instrumentos burdos de control que Ferguson describe no son los únicos medios a través de los cuales el sector controla la protesta y el riesgo en el proceso de entrar en nuevos espacios. También se hace uso de técnicas discursivas que distinguen entre “vieja minería” y “nueva minería”; un lenguaje de dicotomías que caracteriza a la “vieja minería” como aquella que daña el medio

¹⁴ Véase, por ejemplo, http://www.nodirtygold.org/recent_actions.cfm#20041105CQ y <http://www.conflictosmineros.net/al/html/modules.php?name=News&file=article&sid=643>

ambiente, presenta condiciones laborales peligrosas e ignora las necesidades de las comunidades. En cambio, la “nueva minería” se define como social y medio-ambientalmente responsable, intensiva en capital, basada en trabajo calificado y en posesión de tecnologías que le permiten manejar el riesgo ambiental. Se insiste que, a través de estas tecnologías, la minería puede minimizar el daño que produce y, en muchos casos, pasar a ser un vehículo para la protección medio-ambiental en un sentido más general con el establecimiento de zonas de conservación (sin presencia humana) alrededor de la mina.

Más allá de la viabilidad tecnológica y burocrática de estas afirmaciones, ambas son interesantes en un sentido más teórico. La idea de la “nueva minería” constituye un discurso de modernización ecológica *por excelencia*. El sector minero se convierte en un vehículo que muestra a la sociedad que el riesgo ambiental se puede manejar, y por lo tanto la sociedad no debe temer tal riesgo y que los riesgos públicos son mejor manejados por el sector privado. El incremento de iniciativas de Responsabilidad Social y Ambiental Corporativa (RSC) – y la insistencia de que la mejor regulación del sector privado es a través de la ‘auto-regulación’ – es también parte de este discurso. Esto no quiere decir que la RSC es simplemente un show o sin contenido. Se trata más bien de señalar que es posible que, dado su impacto ambiental, la industria minera habría encontrado en RSC un medio que le permite “justificar su existencia” (Jenkins y Yakovleva, 2006:272, 271) al mismo tiempo que estaría tratando de mantener el control de las condiciones de esta misma existencia. La combinación de argumentos sobre modernización ecológica y el manejo privado del riesgo público ha sido central en esta estrategia. Así como en la conexión entre la minería y la seguridad privada, las consecuencias llegan más allá del sector minero.

Sin embargo, estos discursos son frágiles y las protestas continuas y crecientes contra el sector minero sugieren que muchos actores se mantienen escépticos. Una de las razones para explicar este fenómeno es que la imagen que las compañías quieren proyectar y la forma como se organizan las cadenas de producción no encarnan. Para dar un ejemplo, no son las “40 empresas top” quienes hacen mucho del trabajo de la exploración minera sino este trabajo se hace a través de empresas “junior” sin mayor capital (Bridge, 2004:220, 240) y con poca capacidad para manejar relaciones comunitarias, entender procesos locales de toma de decisiones, y evitar conflictos.

Estas empresas se caracterizan por su falta relativa de capital, su necesidad de encontrar depósitos rápidamente para cubrir sus costos y, casi por definición, la poca competencia de sus equipos para manejar de forma competente las relaciones con comunidades, lo cual significa que son muy propicios a cometer errores en sus relaciones con las comunidades, cortando procesos de toma de decisiones y generando conflictos como resultado (Bebbington et al., 2007). El problema para las empresas grandes que luego adquieren las empresas junior, que son exitosas en identificar depósitos minerales, es que también adquieren los conflictos y dificultades en relaciones comunitarias que se originaron en la fase exploratoria.

Para resumir, en medida en que la inversión minera ha crecido, se ha dado tanto en territorios y países que no tenían mayor historia minera, como en aquellos cuya reciente historia ha sido de significativo desorden político. Para facilitar el ingreso en estos territorios, la industria ha desarrollado nuevos vínculos con la provisión de seguridad y ha asumido discursos sobre manejo de riesgos que tienen implicaciones que van más allá del sector. Al mismo tiempo, esta expansión ha generado resistencia y protesta. En este sentido, la geografía de la expansión minera se ha vuelto también una geografía de nuevas formas de protesta y de inestabilidad.

RESPUESTA A LA EXTRACCION: MODELOS DE PROTESTA

De la explotación al desposeimiento: ¿cambios del eje de la protesta frente a la minería?

La explotación minera ha estado siempre acompañada de protesta social. Históricamente, tal protesta se dio en torno a las relaciones entre capital y trabajo. Aunque apoyada por activistas políticos, dicha protesta fue liderada por sindicatos y organizaciones de trabajadores y reivindicaba condiciones laborales, la distribución de utilidades y el control social de la propiedad. La escala en que se dio tal protesta era local y a lo más nacional. En determinados momentos, los procesos en los que se dieron estas disputas condujeron al surgimiento de sindicatos mineros que se convirtieron en fuerzas nacionales importantes que indujeron cambios políticos mayores (por ejemplo, en Bolivia en la década de 1950).

Si consideramos la distinción hecha por David Harvey sobre acumulación de capital basada en explotación de la que se da a través del desposeimiento (Harvey 2005), estas protestas históricas eran protestas sobre relaciones de explotación en donde los trabajadores luchaban por incrementos salariales, disminución de la jornada laboral y mayor participación en utilidades y propiedad. Ese tipo de protestas ciertamente ha continuado y el nuevo auge de los precios de minerales también ha influido para revitalizar las organizaciones de trabajadores que hasta hace poco habían sido debilitadas y desarticuladas por el modelo neo-liberal y proceso de privatización. Sin embargo, las nuevas geografías de la inversión minera que discutimos en las secciones precedentes han inducido nuevas formas de protesta que articulan una gama de preocupaciones sobre medio ambiente, derechos humanos, identidad, territorio, estrategias de vida y nacionalismo.¹⁵

Estas protestas se diferencian de las luchas laborales en diversas formas. La lucha es frecuentemente sobre el significado del desarrollo antes que sobre una simple distribución de la renta. Como consecuencia, los actores involucrados asumen posiciones hostiles respecto a la minería, argumentando que la extracción no debe darse en determinados lugares o, en el extremo, que no debiera darse del todo. Esta puede convertirse en una lucha *contra* el desarrollo orientado al crecimiento económico y *por* un tipo de desarrollo que promueve procesos económicos mas inclusivos (aunque de pequeña escala), respeta los derechos ciudadanos, demuestra integridad ambiental y permite la co-existencia de culturas y formas localizadas de gobernanza territorial (c.f. Escobar, 1995).¹⁶

Segundo, mientras las protestas laborales pueden interpretarse dentro de teorías sobre la relación capital-trabajo, estas formas de protesta mas recientes se pueden leer bajo argumentos teóricos diferentes. Por ejemplo, el argumento de economistas ecológicos – quienes afirman que las evaluaciones económicas ortodoxas excluyen muchos costos y subvalúan el valor de la naturaleza (Martínez-Alier, 2007) – esta claramente presente en las posiciones asumidas por ciertos tipos de grupo ambientalista. De

¹⁵ Claramente, las protestas no están confinadas a la reciente fase de expansión global – algunos lectores recordaran las campanas en contra de Rio Tinto en el Reino Unido durante los 1970s y 1980s. La organizacion People Against Rio Tinto and its Subsidiaries fue fundadora de la Red Minas y Comunidades (www.minesandcommunities.org).

¹⁶ Ello no es para romantizar dichas protestas. Ciertamente, ambiciones personales y políticas poco benignas están generalmente en juego.

forma similar, las posiciones asumidas por grupos ambientalistas mas radicales (Acción Ecológica, 2007) están alimentados por argumentos teóricos en cuanto al valor del capital natural y los limites del uso del capital natural que deben ser respetados. En los argumentos adelantados por las organizaciones que no son absolutamente anti-mineras, pero que si *son* escépticas respecto de aquellos argumentos que pretenden que la minería fácilmente puede traducirse en desarrollo, uno puede ver conceptos que están a la base de la tesis de la ‘maldición de recursos’. En este caso uno ve grupos que no están en contra de la minería *per se*, sino que mas bien insisten en que las condiciones institucionales que se requieren para evitar la maldición simplemente no están presentes. La campaña: Publica Lo Que Pagas y la Iniciativa por la Transparencia en las Industrias Extractivas (EITI por sus siglas en ingles) son significativas en este aspecto pues abordan el aspecto central de la literatura de la maldición de recursos, esto es, la falta de transparencia de los gobiernos en el uso de recursos mineros (Karl 2007).

Tercero, las escalas a las cuales se da la protesta han cambiado. De forma creciente estas son protestas que operan simultáneamente en la localidad afectada por la mina, como en la esfera política nacional, en la sede de las compañías y bancos de inversión y a lo largo de la cadena de producción de los minerales (cf. Tsing, 2004; Keck y Sikkink, 1998; Haarstad y Fløysand, 2007). Los actores involucrados también han cambiado. Junto a organizaciones locales y nacionales están otras que defienden los derechos humanos, ONGs ambientalistas y otras mas especializadas. Las diferentes protestas han sido articuladas a través de redes internacionales y alianzas pre-existentes como las de Amigos de la Tierra Internacional, o a través de alianzas nuevas que surgieron específicamente para lidiar con temas mineros (véase el pie de página Nro.3). Algunos académicos que trabajan en estos temas también se han incorporado a estas redes articuladas y señalan que los temas de derechos humanos y justicia social que salen a raíz de la actividad minera requieren nuevas y mas activista formas de participación académica (Kirsh, 2006).

Algunas campañas internacionales se organizan en torno a casos emblemáticos donde se arguye que los abusos de derechos humanos o medioambientales son particularmente serios, como los de las protestas en contra de Freeport McMoRan en Papua y otros menos conocidos a nivel internacional como el de Majaz/Rio Blanco

Copper en el Norte Peruano que articuló a grupos de Perú, Bélgica, el Reino Unido y los Estados Unidos (véase www.perusupportgroup.org.uk). Mientras algunas campañas se dirigen a compañías individuales (por ejemplo el Día Internacional de Acción Contra Barrick Gold, una propuesta global que incluyó protestas simultáneas en Argentina, Chile, Perú, Canadá y Australia) otras involucran más bien a toda la cadena de producción (como la de No al Oro Sucio o las orientadas al comercio justo en minerales).¹⁷ Finalmente están aquellas campañas que luchan por los derechos de los pueblos indígenas y como un componente presionan para que estos pueblos tengan derecho al “consentimiento previo, libre e informado” sobre si permiten o no la extracción mineral en sus territorios. Este rango amplio de campañas internacionales refleja la importancia cobrada hoy en día por temas mineros para el trabajo de activistas y grupos de defensa y desarrollo como Amigos de la Tierra Internacional, Oxfam Internacional y las agencias católicas de justicia social articuladas en CIDSE (Cooperación Internacional para el Desarrollo en Solidaridad).

La cuarta diferencia respecto a las protestas laborales es que – de nuevo en el lenguaje de Harvey (2005) - estas protestas pueden ser entendidas como respuestas a la acumulación por desposeimiento antes que a la acumulación por explotación (Bebbington et al, 2008). La naturaleza real (o percibida) del desposeimiento varía de acuerdo a los casos – estas han sido luchas sobre el desposeimiento: de tierra, territorio, paisaje y recursos naturales; de propiedad, auto-gobierno, ciudadanía y derechos culturales; y del valor inherente que tiene el sub-suelo. En muchos casos la rápida expansión de las concesiones, junto a las ventajas fiscales y la generación de mega-utilidades, han generado la sensación de que se está dando un nivel de desposeimiento que hace pensar de nuevo en el argumento de Eduardo Galeano (1973) en su obra clásica *Las Venas abiertas de Latinoamérica*. En suma, estos son movimientos y protestas en torno a la relación existente entre capital, sociedad, medio ambiente y desarrollo y que buscan la construcción de una alianza de clases más amplia que la que se dio en el caso de los anteriores movimientos laborales mineros.

Protestas alrededor de la minería: ¿epifenómeno o contribución al desarrollo?

¹⁷ Véase Hilson (2008), Sarin (2006) y <http://www.nodirtygold.org>

La preocupación existencial de todas estas protestas es si a fin de cuentas producen alguna diferencia, es decir, si es que cambian el curso de las relaciones entre minería y desarrollo o si, en última instancia, juegan un rol poco relevante en procesos mayores que son definidos y dirigidos por las empresas y los Ministerios de Economía y de Energía y Minas. La pregunta parece ser aun más relevante si uno toma en cuenta las fracturas que existen entre sub-grupos dentro de movimientos sociales, fracturas que frecuentemente impiden que los grupos puedan construir y sostener un discurso coherente sobre minería y alternativas de desarrollo (Bebbington et al, 2008). Exploramos a continuación el impacto (si acaso alguno) de estos movimientos a nivel internacional, nacional y sub-nacional.

¿Replanteamiento de debates internacionales?

Un tema que llama la atención en la última década de expansión minera es la forma como junto al surgimiento de activismo y protesta inter y transnacional, se ha dado también un cambio casi organizado en el discurso de la industria minera. A nivel global, este punto puede ser ilustrado con tres ejemplos: En respuesta a la crítica creciente, entre los años 2000 y 2002, parte de la industria minera promovió la iniciativa Minería, Minerales y Desarrollo Sostenible. Aunque con un matiz reformista que generó críticas por grupos de activistas, la iniciativa (MMSD, 2002) propugnaba que la industria considerase temas medio-ambientales, de sostenibilidad, pueblos indígenas, derechos humanos y corrupción en un estilo diferente al cual se habría dado en periodos pasados. El Reporte de Industrias Extractivas (Banco Mundial, 2004), que cubre el periodo 2000-2004, fue también una respuesta a las protestas de varios grupos internacionales frente a las consecuencias negativas de las inversiones en minería e hidrocarburos financiadas por el Banco Mundial (Pegg, 2006). Aun cuando el Banco no aceptó muchas de las recomendaciones, el Reporte tuvo el efecto de introducir en la institución temas que hasta entonces habían sido muy poco discutidos en público. Hasta que punto esto ha cambiado las decisiones de inversión es una pregunta que queda abierta, pero lo que es claro es que el proceso llevó a un nivel de escrutinio del Grupo del Banco Mundial que es difícil de revertir; además, para grupos activistas, les da espacios de influencia que antes no tenían..

El tercer cambio fue la fundación del Consejo Internacional para Minería y Metales (ICMM por su sigla en inglés, una especie de “club” o auto-denominado grupo de compañías mineras responsables). La creación de ICMM tiene mucho que ver con un compromiso creciente de ciertas compañías con principios de desarrollo sostenible divulgados hacia el 2002 en el Encuentro Mundial por el Desarrollo Sostenible. Para ser parte de ICMM las compañías deben suscribir el “marco de desarrollo sostenible”: diez principios de responsabilidad social y medio-ambiental, divulgación pública de sus acciones respecto a dichos principios y con verificación independiente. Por supuesto el ICMM es *también* un instrumento para generar conocimientos que favorecen a las empresas y podría ser visto como una variante de “lavado-verde” para proteger su cuota del mercado. Cualquiera sea el caso, el hecho de comprometerse a estos principios permite otro punto de influencia y escrutinio público por parte de grupos externos y activistas (por ejemplo, War on Want 2007). El ICMM se ha visto también obligado a enfrentar los argumentos sobre la ‘maldición de recursos’ (por ejemplo, ICMM 2006). No obstante que ellos explican los problemas sobre todo en términos de la incapacidad de los gobiernos y la debilidad de las instituciones sociales, antes que como resultado de la expansión minera *per se*, también reconocen que los efectos de la tesis *a veces* se ven en la práctica. De esta forma una posible lectura de esta respuesta del sector podría ser la siguiente: que al reconocer que hay elementos de la tesis de la maldición de recursos que se dan en la práctica, que estos generan movilizaciones sociales, y que el efecto tanto de la “maldición de recursos” y de estas movilizaciones es amenazar la viabilidad de inversiones a gran escala, las corporaciones ahora son más conscientes respecto a la necesidad de identificar medidas no solo para promover la expansión del sector minero sino también para asegurar que dicho crecimiento fomente el desarrollo.

Replanteando debates nacionales en Latinoamérica

La escala más interesante en la cual se puede observar la relación entre protesta, movilización y los debates sobre minería y desarrollo es la nacional y aquí Latinoamérica presenta un rango de resultados. En un extremo están países como Honduras y Guatemala donde, aun con presencia de activismo y protesta, los procesos de expansión minera han evolucionado más o menos en la forma como las empresas,

las embajadas y las agencias de cooperación bilateral lo han deseado.¹⁸ En el extremo opuesto están casos como Ecuador y Bolivia donde activistas y movimientos sociales han pasado a ser parte del gobierno y con ello han introducido sus preocupaciones sobre la expansión minera en las agendas públicas. En estos casos las instituciones gubernamentales han servido para dar mayor cabida a las preocupaciones de los movimientos y abrir nuevos espacios públicos donde se puede dar un debate sobre lo deseable de la minería. Entre estos dos extremos hay países como Perú donde la protesta y el activismo claramente han moldeado el debate sobre expansión minera y gobernanza, pero donde también, en última instancia, poco cambia a nivel de políticas públicas sobre regulación de la minería y de su relación con el desarrollo.

Si bien cada contexto nacional tiene sus particularidades, una lectura transversal de los diversos casos sugiere que hay mucho más posibilidad de que los movimientos puedan promover ideas que se traduzcan en cambios sustantivos y sostenidos en la manera en que la expansión minera este gobernada, cuando los mismos movimientos pasan a formar parte del gobierno. Tal efecto requiere que el activismo, los movimientos sociales y los partidos políticos estén articulados (Crabtree, 2008). Tal como demuestran los debates en Ecuador durante el 2008, ciertas constelaciones de fuerzas pueden llevar a situaciones en las cuales las discusiones sobre la maldición de recursos o sobre las relaciones entre expansión minera, medio ambiente y conflicto social pueden conducir hasta reformas constitucionales. De hecho en algún momento el debate entre el proceso constituyente llegó a sugerir que la minería a cielo abierto debía prohibirse en el territorio ecuatoriano o que, al menos, debían establecerse cláusulas constitucionales que restrinjan significativamente las posibilidades de expansión. Aunque el producto final no fue tan radical, el mismo debate – junto con las tensiones que este causo entre el Presidente de Ecuador y el Presidente de la Asamblea Constituyente - hicieron aun más pública la discusión sobre la minería.

Cambiando trayectorias territoriales

¹⁸ El papel de ciertas embajadas y programas de cooperación en facilitar la expansión neo-liberal de la minería y de las inversiones de empresas de sus países no debería subestimarse. La embajada Canadiense jugo un papel importante en Ecuador y Honduras y, en el caso de Perú, un grupo de embajadas trabajaron juntas.

Las protestas más viscerales sobre minería ocurren en aquellos territorios directamente afectados. Es allí donde las tierras de pastoreo se pierden, la oferta de agua se ve comprometida, se pelean los empleos, se desplaza la minería artesanal y donde el ruido, el polvo y el traslado peligroso de productos mineros forman parte de la vida diaria de las poblaciones. Son estas experiencias y las expectativas que se generan, las que muchas veces producen conflicto en situaciones de expansión minera. Tales conflictos no solo enfrentan a opositores y defensores de la minería sino que además se dan entre diversos grupos que tratan de obtener las mayores ventajas de un proceso de expansión minera. Con frecuencia, los conflictos recogen rivalidades y diferencias ya existentes y lo que hace la minería es exacerbarlas. Por lo tanto, la protesta generada en torno a la minería influye en la dinámica territorial pues cambia el balance y ambiente socio-político, debilita las instituciones locales y da lugar a que se establezcan elementos que luego pueden conducir a una reproducción de la maldición de recursos a nivel local (Bebbington et al., 2007).

La protesta *puede* conducir a cambios en las prácticas de las corporaciones. A nivel de mina, los patrones de expansión podrían responder a la protesta a través de demoras para establecerse en determinadas áreas donde hay mayor resistencia y expandiéndose más bien en otros frentes. La protesta o la anticipación a la protesta han hecho también que las empresas incrementen sus inversiones en ambientales y programas de responsabilidad social – aún cuando a veces estos pueden verse como instrumentos para debilitar a ciertas organizaciones sociales. Hasta que punto se da uno u otro de estos efectos depende, por supuesto, de muchos factores. Un primer factor es el nivel de cohesión de la protesta – en situaciones donde los movimientos son frágiles o fracturados es probable que las empresas hagan mucho menos. Segundo, la cultura corporativa y los diversos estilos y capacidades que caracterizan a las empresas también son un factor. Aunque este es un tema poco estudiado todavía, es evidente que las empresas no son todas iguales (Jenkins y Yakovleva, 2006). Las empresas junior de menor escala operan dentro de horizontes temporales cortos y son menos proclives a adaptarse al cambio y también algunas empresas grandes son reticentes a ir más allá – piénsese otra vez en La Oroya. Sin embargo, otras compañías transnacionales han mostrado cierta inclinación para adaptar sus prácticas y, reconociendo que tener una mala reputación puede reducir sus posibilidades de negocios, han incrementado sus

inversiones para contribuir al desarrollo local, han generado mas empleo local y han sido mas serios en buscar acuerdos negociados con la población (Thorp, 2008).

Mientras la ambivalencia caracteriza la respuesta de muchas poblaciones locales a la minería, en otros casos se ha mostrado una oposición más o menos unificada. En casos donde tal oposición ha surgido durante la fase de exploración¹⁹ ha logrado parar la expansión minera – con lo cual se mantiene el carácter agrario de los territorios. Algunas experiencias han incluido la realización de procesos de consulta (referéndums) organizados por las poblaciones locales para medir, y demostrar, la opinión local en cuanto a la deseabilidad de la minería, con casos emblemáticos como los de Tambogrande, Huancabamba y Ayabaca en Piura (Perú), Esquel en Argentina, y Sipacapa/San Marcos en Guatemala (véase Haasrstad y Floysand, 2007; Bebbington y Burneo, 2007; Bebbington et al., 2007). Estos casos, aunque pocos, han pasado a ser emblemáticos para el trabajo de activistas pues demuestran que la minería *puede* ser detenida.²⁰

El significado de dichos casos va mas allá de los territorios particulares en los cuales estos ocurren - por razones que van al corazón de la relación entre neo liberalización y democracia. Estos son casos donde las poblaciones argumentan que son ellos quienes deben determinar el tipo de desarrollo que debiera darse en sus territorios y que su opinión mayoritaria debe pesar mas que la de una empresa minera o que las preferencias políticas de algunos ministerios comprometidos con modelos de desarrollo basados en el crecimiento económica, la liberalización del mercado y la inversión directa extranjera. Con ello, tales poblaciones desafían a gobiernos (y corporaciones) a explicitar su posición en cuanto al balance deseable que debería haber entre las preferencias del gobierno central, los derechos de la inversión privada y la democracia participativa local en la determinación de la trayectoria de desarrollo en un determinado territorio. Habiendo dicho ello, hay que también reconocer que las consultas locales tienen limitaciones porque los derechos de propiedad sobre los recursos del subsuelo son otorgados por los gobiernos centrales y cambiar esto

¹⁹ Una vez que la mina esta en operación, la protesta lo que hace es negociar la forma en que se debe dar la explotación y no si esta debe continuar.

²⁰ Estos casos también han influido en la legislación de otras zonas. Luego del referéndum de Esquel, otras provincias argentinas produjeron legislación minera mas restrictivas.

requeriría cambios constitucionales que las protestas locales son insuficientes de promover.²¹

Tales protestas llaman la atención sobre la debilidad de la regulación del sector minero, y la ausencia de una seria planificación espacial y ecológica de la expansión de las industrias extractivas. Y aunque a veces han inducido respuestas gubernamentales que tienden al autoritarismo (Bebbington y Burneo, 2008), en otros momentos parecen haber abierto ciertos espacios que podrían llevar hacia una regulación más racional del sector como lo muestra, por ejemplo, los argumentos alrededor de la Constitución Ecuatoriana. La resolución final de estos debates marcará la pauta para una definición de cuales van a ser – en el sector minero – las relaciones entre neo-liberalización, reforma del estado y democracia.

CONCLUSIONES

En la medida en la que las economías de China, India y otros países continúen creciendo a las tasas hasta ahora observadas, se espera que la demanda por minerales, materiales de construcción e hidrocarburos también siga creciendo; esto llevara a una expansión geográfica mayor de las actividades extractivas con creciente participación global de empresas basadas en China, India, Brasil y Rusia. Un escenario de este tipo levanta una serie de cuestionamientos de política, investigación y teoría. En esta sección final abordamos aquellos que, en nuestra opinión, son fundamentales.

Primero, consideremos algunos de los retos medioambientales que la expansión minera trae consigo. Casi por definición, la expansión abarcara nuevos territorios; la experiencia en Latinoamérica es que esos nuevos territorios tienden a ser ecológicamente vulnerables (por ejemplo ver WRI, 2003). Algunos de estos proyectos afectan cabeceras de cuenca y otros están ubicados cerca o en áreas glaciares.

También se ven proyectos para depósitos de grado bajo que requieren la remoción de grandes cantidades de roca y el uso de mayores cantidades de agua. En el área andina, y en contextos de rápido desglaciamiento, donde se requiere una gestión cuidadosa

²¹ Así, tal régimen de asignación de derechos de propiedad incrementa la posibilidad de que la protesta se vuelva violenta pues las posibilidades de cambio a través de procesos políticos ordinarios se reducen. Agradecemos a uno de nuestros comentaristas por esta observación.

del agua para un desarrollo sostenible, la expansión conducirá a conflicto por un recurso que es fuertemente disputado.²² Mientras las compañías mineras insisten en que su uso de agua es altamente eficiente, las comunidades y los activistas se mantienen incrédulos y los hidrólogos señalan que los efectos de la remoción de grandes partes de roca en zonas de cabecera de fuentes de agua puede tener efectos no lineales en la disponibilidad de agua en zonas más bajas.²³ Aquí hay toda una agenda para la investigación que se ubica en la interfase entre la economía política del desarrollo y la hidrología – sería un programa de investigación no solo con un potencial de abordar temas prácticos y de política, pero también una oportunidad para pensar en términos teóricos sobre nuevas formas sociales de producción de naturaleza (Castree y Braun, 2001). Esto ofrece también una serie de conexiones a ser exploradas entre expansión minera, manejo público y privado del riesgo, y procesos de modernización ecológica.

Estas transformaciones también requieren mayor trabajo sobre el surgimiento y consecuencias de los movimientos sociales – un terreno que le es más conocido a la ecología política. La expansión minera continuara induciendo nuevas formas de conflicto social, mucho del cual estará ligado a la presión por acceso y uso de agua debido no solo a que el agua es fundamental para las estrategias de vida de las poblaciones locales, sino también porque es probable que la preocupación respecto al acceso seguro a agua de buena calidad articule movimientos en un spectrum que es amplio en términos geográficos (articulando actores rurales y urbanos a lo largo de la cuenca hidrográfica) así como políticos (articulando actores radicales y reformistas). En este sentido el tema agua tiene mucho mas poder de articulación que temas como la propiedad de tierras rurales, los derechos indígenas, la soberanía o el abuso de corporaciones transnacionales, los cuales tienden a ser preocupaciones de grupos sociales mucho mas restringidos.

En este punto hay muchos temas que merecen mayor investigación. Para los movimientos en si mismos, es fundamental mirar las condiciones bajo las cuales sus

²² En zonas más húmedas, los problemas de agua son diferentes. En la medida en que el cambio climático esta afectando considerablemente la caída de aguas, el manejo de residuos y contenedores es un reto pues existe una gran posibilidad de que las aguas se contaminen y las estructuras de contención colapsen.

²³ Mark Williams, Universidad de Colorado, comunicación personal, Octubre 2006.

objetivos pueden ser institucionalizados y las estrategias a seguir para ello. Tal vez para la teoría del desarrollo las preguntas más importantes se dan en torno a la relación entre movimiento social, naturaleza y economía política. Las inter-acciones entre estos tres constituyen un proceso eminentemente geográfico pues no solo sus resultados dan lugar a diferentes tipos de relaciones medio ambiente-sociedad, sino que las relaciones también varían de acuerdo al contexto nacional e internacional en el que se dan. Estas variaciones a través del espacio están en sí mismas interrelacionadas y deben entenderse también en el contexto de flujos globales de capitales, formas internacionales de regulación, y redes transnacionales de activistas y profesionales. Obviamente el sector minero no es el único en que se dan estos procesos – de hecho hay un trabajo creciente en esta línea sobre cadenas de mercancías en otros sectores. No obstante, el sector minero es tal vez especial y específico en el sentido de que, en comparación a otros sectores, genera formas más complejas de protesta social; como tal provee un espacio fructífero para reflexionar sobre la forma como la economía política y la movilización social se co-producen y, al mismo tiempo, producen geografías del desarrollo.

Tercero, estos procesos presentan un contexto interesante para analizar y comparar procesos de formación del estado y democráticos bajo modelos neoliberales y contextos que pretenden ser post-neoliberales (Ecuador, Bolivia, etc.). El sector minero ha visto reformas institucionales pro inversión que ha tenido fuerte repercusión en la capacidad del estado para gobernar. Tales reformas han dado lugar a regímenes en los cuales los pagos por regalías son bajos, donde los ministerios responsables de promover la inversión son también responsables de la regulación medio ambiental, donde las relaciones privadas juegan un papel cada vez más importante en la administración de fuerzas de seguridad y donde los instrumentos para el ordenamiento de la expansión minera han sido debilitados o eliminados.²⁴ La relación entre tales instrumentos regulatorios y la protesta social puede fluir en dos direcciones. Por un lado, en ausencia de regulación se pueden generar protestas si es que la expansión minera se ubica en áreas sensibles donde un proceso “racional” y participativo de ordenamiento territorial juzgaría que es inapropiado. Por otro lado, la

²⁴ Uno de estos casos extremos es Ecuador donde, en Abril del 2008, la ley era tal que ante un requerimiento de concesión por una empresa o persona, el estado tenía que otorgarla. Una vez dada la concesión esta podía ser renovada por 30 años o a perpetuidad. Esta norma significaba que el estado ecuatoriano estaba legalmente inhabilitado para gobernar sobre la expansión minera.

presión política ejercida a través de la protesta podría ser un *sine qua non* para que se generen instituciones regulatorias más inclusivas. La intensidad del conflicto en el sector minero permite que uno explore hasta que punto la protesta podría inducir instituciones estatales que favorezcan una regulación social y medioambientalmente más inclusivas en el sector así como una distribución más equitativa del valor generado en la minería.

Esto nos devuelve al punto de partida de este artículo: la maldición de los recursos naturales. Aunque la literatura ha demostrado que dicha tesis no es inherente a la expansión mineral, hay suficiente evidencia que demuestra que la *realpolitik* del sector lleva a prácticas que no facilitan escapar de la maldición ni permiten abordar cuestiones de gobernanza antes de que se inicie un proceso de expansión minera. En ese contexto, no debería sorprender que la expansión continúe siendo conflictiva. El reto analítico aquí es entender hasta que punto y de que forma la protesta y el activismo puedan contribuir a construir salidas a la maldición de recursos y evitar una situación de convivencia perversa entre extracción poca regulada y conflicto generalizado lo cual igual tendría serias repercusiones para el medio ambiente, la economía, la sociedad y la formación del estado.

REFERENCIAS

- Acción Ecológica (2007) 'El Ecuador Post-Petrolero No Puede Convertirse en el Ecuador Minero.' Quito: Acción Ecológica.
- Aspinall, E. (2007) 'The Construction of Grievance – Natural Resources and Identity in a Separatist Conflict.' *Journal Of Conflict Resolution* 51 (6): 950-972.
- Auty, R. (1993) *Sustaining Development in Mineral Economies: The Resource Curse Thesis*. London: Routledge.
- Auty, R.(ed) (2001) *Resource Abundance and Economic Development*. Oxford: Oxford University Press.
- Auty, R. (2008) 'From Mining Enclave to Economic Catalyst: Large Mineral Projects in Developing Countries'. *Brown Journal of World Affairs*, Vol. 13, No. 1, pp. 135-145.

- Auty, R. and Gelb, S. (2001) 'Political Economy of Resource-Abundant States' pp. 126-144 in Auty (2001).
- Bebbington, A. (ed) (2007). *Minería, Movimientos Sociales y Respuestas Campesinas. Una Ecología Política de Transformaciones Territoriales*. Lima: Instituto de Estudios Peruanos/Centro Peruano de Estudios Sociales.
- Bebbington, A. and Burneo, M. (2008) 'Conflictos Mineros: Freno al Desarrollo ó Expresión Ciudadana' pp. 44-51 in Oxfam GB (ed.) *Pobreza, Desigualdad y Desarrollo en el Perú. Informe Anual: 2007-8*. Lima, Peru. Oxfam.
- Bebbington, A., Connarty, M., Coxshall, W., O'Shaughnessy, H., Williams, M. (2007) *Mining and Development in Peru: With Special Reference to the Rio Blanco Project, Piura*. London: Peru Support Group.
- Bebbington, A., Humphreys Bebbington, D., Bury, J., Lingan, J., Muñoz, J.P., Scurrah, M. (2008) 'Mining and social movements: struggles over livelihood and rural territorial development in the Andes' *World Development* 36(12)
- BBC (2006) 'Los 10 lugares más contaminados' BBC World, 19th October 2006
- Blacksmith Institute (2007) 'World's Worst Polluted Places 2007'.
<http://www.blacksmithinstitute.org/ten.php>
- Bridge G. (2004b) 'Contested Terrain: Mining and the Environment.' *Annual Review of Environment and Resources* 29 205-59
- Bridge, G. (2004a). 'Mapping the Bonanza: Geographies of Mining Investment in an Era of Neoliberal Reform' *The Professional Geographer* 56(3): 406–421
- Brunnschweiler, C. and Bulte, E. (2008) 'Linking Natural Resources to Slow Growth and More Conflict.' *Science* 320: 616-617 (May 2nd, 2008)
- Bury, J. (2005) 'Mining mountains: neoliberalism, land tenure, livelihoods and the new Peruvian mining industry in Cajamarca.' *Environment and Planning A* 2005, volume 37(2) pp. 221 – 239.
- Campbell, B. (2003) 'Factoring in Governance is Not Enough. Mining Codes in Africa, Policy Reform and Corporate Responsibility,' *Minerals and Energy*, 18(3): 2-13.
- Campbell, B. (2006) 'Good Governance, Security and Mining in Africa,' *Minerals and Energy* 21(1): 31-44.
- Campbell, B. (2008) 'Refore Processes in Africa: Issues and Trends.' Presentation to the 2nd International Study Group Meeting, Economic Commission for Africa, 19-21st May, 2008, Addis Ababa.

- Cardiff, S. and Sampat, P. (2007) 'Minería a Nivel Global' Paper presented at the conference Minería y Comunidades, Flacso, Quito, November 21-22, 2007.
- Castree, N. and Braun, B. (2001) (eds) *Social Nature: Theory, Practice and Politics*. Oxford: Blackwell.
- Christian Aid (2008) *Death and taxes: the true toll of tax dodging: A Christian Aid Report*. London: Christian Aid.
- Clark, A. and Naito, K. (1998) 'Risks and Opportunities for Foreign Investment in the Mineral Sectors of the Central Asian Republics: Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan and Uzbekistan' *Resources Policy*, 24(2): 105-114.
- Collier, P., and Hoeffler A. (2005) 'Resource Rents, Governance, and Conflict,' *Journal of Conflict Resolution* 49(4): 625-633.
- Collier, P. and Hoeffler, A. (2004) 'Greed and grievance in civil war.' *Oxford Economic Papers* 56(4):563-595
- Crabtree, J. (2008) 'Social Movements and Political parties: comparisons from Peru and Bolivia.' Presentation to the seminar on Territory, Conflicts and Development, St. Antony's College, Oxford, May 2nd, 2008.
- Davis, G.A. (1995) 'Learning to Love the Dutch Disease – Evidence from the Mineral Economies,' *World Development*, 23(10): 1765-1779.
- Davis, G.A., and Tilton, J.E. (2002) *Should Developing Countries Renounce Mining? A Perspective on the Debate*. Report Prepared for the International Council on Mining and Metals (ICMM), London: ICMM.
- de Echave, J. (2007) 'La Minería en el Perú: Entre la Transformación de los Conflictos y el Desafío Programático' Presentation to the seminar on Territory, Conflicts and Development, Manchester, October, 2007.
- De Soysa, I. and Neumayer, E. (2007) 'Resource Wealth and the Risk of Civil War Onset: Results from a New Dataset of Natural Resource Rents, 1970-1999' *Conflict Management and Peace Science* 24(3): 201 - 218.
- Diamond, J. (2005) *Collapse: How Societies Choose to Fail or Succeed*. New York: Penguin.
- Escobar, A. (1995) *Encountering Development: The Making and Unmaking of the Third World*. Princeton: Princeton University Press.
- Ferguson, J. (2006) *Global Shadows. Africa in the Neo-liberal World Order*. Durham. Duke University Press.

- Figuroa, E., Calfucura, E. and Nuñez, J. (2002) 'Green National Accounting: The Case of Chile's Mining Sector' *Environment and Development Economics* 7: 215-239.
- Fisher, E. (2007) 'Occupying the Margins: Labour Integration and Social exclusion in Artisanal Mining in Africa' *Development and Change* 38(4): 735-760.
- Fraser, B. (2006) 'Peruvian Mining Town Must Balance Health and Economics.' *The Lancet* 367(9514): 889-890
- Freudenburg, W. and Wilson, L. (2002) 'Mining the Data: Analyzing the Economic Implications of Mining for Nonmetropolitan Regions.' *Sociological Inquiry* 73(4): 549-575.
- Frynas, J.G. (1998) 'Political instability and business: focus on Shell in Nigeria.' *Third World Quarterly* 19(3): 457-478.
- Galeano, E. (1973) *Open veins of Latin America*, Monthly Review Press New York.
- Haarstad, H. and Fløysand, A. (2007) 'Globalization and the Power of Rescaled Narratives: A Case of Opposition to Mining in Tambogrande, Peru' *Political Geography* 26: 289-308.
- Harvey, D. (2005) *The New Imperialism*. Oxford. Blackwell.
- Hilson, G. (2008) "'Fair Trade Gold': Antecedents, Prospects and Challenges.' *Geoforum* 39(1): 386-400.
- Hilson, G., Yakovelva, N. (2007) 'Strained Relations: a Critical Analysis of the Mining Conflict in Prestea, Ghana.' *Political Geography* 26(1): 98-119.
- Hinojosa V., L., Bebbington, A., Barrientos, A., Addison, A. (2008) *Social Policy and State Revenues in Mineral-Rich Contexts*. Manchester. Paper prepared for UNRISD, Geneva.
- Holden, W. Jacobson, D. (2007) 'Mining Amid Armed Conflict: Nonferrous Metals Mining in the Philippines' *Canadian Geographer* 51(4): 475-500.
- Humphreys, M., Sachs, J. and Stiglitz, J. (2007) *Escaping the Resource Curse*. New York: Initiative for Policy Dialogue, Columbia University Press.
- ICMM (2006) *Resource Endowment initiative - Synthesis of four Country Case Studies*. London: International Council on Mining and Metals.
- Jenkins, H., and N. Yakovleva (2006) 'Corporate Social Responsibility in the Mining Industry: Exploring Trends in Social and Environmental Disclosure', *Journal of Cleaner Production* 14: 271-84.

- Karl, T.L. (1997) *The Paradox of Plenty: Oil Booms and Petro-States*. Berkeley and Los Angeles: University of California Press.
- Karl, T.L. (2007) 'Ensuring Fairness: The Case for a Transparent Fiscal Contract' pp. 256-285 in Humphreys et al. (2007)
- Leith, D. (2003) *The Politics of Power: Freeport in Suharto's Indonesia*. Honolulu: University of Hawai'i Press.
- Martinez-Alier, J. (2007) 'Keep Oil in the Ground: Yasuni in Ecuador' *Economic and Political Weekly* 42(42) 20-10-2007.
- Mikesell, R. (1997) 'Explaining the Resource Curse, with Special Reference to Mineral-Exporting Countries' *Resources Policy* 73(4):191-197
- Keck, M. y Sikkink, K. (1998). *Activists beyond borders. Advocacy networks in international politics*. Ithaca: Cornell University Press.
- Kirsch, S. (2006) *Reverse Anthropology. Indigenous Analysis of Social and Environmental Relations in New Guinea*. Stanford: Stanford University Press.
- MMSD (2002) *Breaking New Ground: Mining, Minerals and Sustainable Development. Report of the MMSD Project*. London: Earthscan.
- O'Shaughnessy, H. (2007) 'Poisoned City Fights to Save its Children.' *The Observer*, August 12th, 2007
- Pegg, S. (2006) "Mining and Poverty Reduction: Transforming Rhetoric into Reality". *Journal of Cleaner Production*, Vol. 14, No. 3-4, pp. 376-387.
- Peluso, N. and Watts, M. (eds.) (2001) *Violent Environments*. Ithaca: Cornell University Press.
- PriceWaterhouseCoopers (2007) *Mine: Riding the Wave. Metals and Mining, Review of Global Trends in the Mining Industry, 2007*. London: PriceWaterhouseCoopers.
- PriceWaterhouseCoopers (2008) *Mine: As Good as it Gets? Review of Global Trends in the Mining Industry, 2007*. London: PriceWaterhouseCoopers.
- Ross, M. (2008) 'Mineral Wealth, Conflict, and Equitable Development' pp. 193-216 in A. Bebbington, A. Dani, A de Haan, M. Walton (eds) *Institutional pathways to equity: addressing inequality traps*. Washington DC.: World Bank.
- Rosser, A. (2006) 'Escaping the Resource Curse'. *New Political Economy* 11(4):. 557-570.

- Rosser, A. (forthcoming) ‘Natural Resource Wealth, Development and Social Policy: Evidence and Issues.’ in K. Hujo and S. McClanahan (eds.) *Financing Social Policy: Mobilizing Resources for Social Development*. Palgrave/UNRISD, Basingstoke
- Sachs, J. and Warner, A. (1995) ‘Natural Resource Abundance and Economic Growth’ *National Bureau of Economic Research Working Paper Series*, No. Working Paper 5398, pp. 1-46
- Sarin, R. (2006) ‘No Dirty Gold: Consumer Education and Action for Mining Reform’ *Journal Of Cleaner Production* 14(3-4): 305-306.
- Shnayerson, M. (2003) ‘Devastating luxury.(controversy over Hampton's estate of Renco Group's Ira Rennert)’. *Vanity Fair*, July 1st, 2003
- Stiglitz, J. (2007) ‘What is the Role of the State?’ pp. 23-52 in Humphreys et al. (2007)
- Stijns, J-P. (2006) ‘Natural Resource Abundance and Human Capital Accumulation’ *World Development*. 34(6):1060-1083.
- Szablowski, D. (2002) ‘Mining, Displacement and the World Bank: A Case Analysis of Compania Minera Antamina’s Operations in Peru’ *Journal of Business Ethics* 39: 247–273
- Thorp, R. (2008) ‘Impacto minero y pobreza’ *El Comercio* 18th February, 2008. Lima: El Comercio.
- Tsing, A. (2004) *Friction: An Ethnography of Global Connections*. Princeton: Princeton University Press.
- UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development) (2007) *World Investment Report 2007: Transnational Corporations, Extractive Industries and Development*. New York and Geneva: United Nations.
- War on Want (2007) *Fanning the Flames. The Role of British Mining Companies in Conflict and the Violation of Human Rights*. London: War on Want.
- Weber-Fahr, M. 2002. *Treasure or Trouble? Mining in Developing Countries*. World Bank and International Finance Corporation, Washington D.C.
- World Bank (1992) *Strategy for African Mining*, Technical Paper No. 181, Africa Technical Department Series, Mining Unit, Industry and Energy Division. Washington DC: World Bank.

- World Bank (2004) *Striking a Better Balance – The World Bank Group and Extractive Industries: The Final Report of the Extractive Industries Review. World Bank Group Management Response*. Washington DC: World Bank.
- World Bank (2005) *Extractive Industries and Sustainable Development. An Evaluation of World Bank Group Experience*. Washington DC: World Bank, IFC, MIGA.
- WRI (2003) *Mining and Critical Ecosystems. Mapping the Risks*. Washington DC.: World Resources Institute

Anthony Bebbington es Profesor en Medio Ambiente, Sociedad y Desarrollo en el IDPM, Universidad de Manchester, Investigador Profesorial del Concejo de Investigaciones Económicas y Sociales (ESRC) del gobierno británico, e Investigador Afiliado del Centro Peruano de Estudios Sociales, Perú. Su trabajo aborda temas de sociedad civil, estrategias de vida y desarrollo, la economía política del desarrollo rural, y conflictos, desarrollo e industrias extractivas. Sus libros recientes incluyen: *Minería, movimientos sociales y respuestas campesinas: una ecología política de transformaciones territoriales* (Lima: Instituto de Estudios Peruanos/Centro Peruano de Estudios Sociales, 2007); *Investigación y cambio social: desafíos para las ONG en Centroamérica y México* (Ciudad de Guatemala: Editorial de Ciencias Sociales/FLACSO, 2007); y *Can NGOs Make A Difference? The Challenge of Development Alternatives* (Londres: Zed, 2008, con D. Mitlin and S. Hickey),.